UN MATRIMONIO PROHIBIDO EN EL BUENOS AIRES VIRREINAL: 
EL CASO DEL OIDOR TOMÁS IGNACIO PALOMEQUE

VIVIANA KLUGER 
Universidad de Buenos Aires 
Universidad del Museo Social Argentino

1. INTRODUCCIÓN

Un caluroso verano de 1786, la ciudad de Buenos Aires se sacude con la noticia de que el Virrey, Marqués de Loreto, ha decidido tomar cartas en la cuestión del casamiento del oidor de la recientemente instalada Audiencia de Buenos Aires, Tomás Ignacio Palomeque, con Andrea Albizury, vecina de la misma ciudad, en abierta violación a la prohibición que pesaba en cabeza de estos magistrados, de contraer matrimonio con mujer residente en su distrito, sin licencia real.

 existe una vasta bibliografía sobre la organización política indiana, la administración de justicia, el sistema de las audiencias, los oidores, los impedimentos para contraer matrimonio, e incluso ha habido referencias al mencionado suceso. Sin embargo, hasta ahora no se han estudiado, desde el punto de vista histórico-jurídico, las actuaciones que inició el Virrey, y que motivaron el traslado del oidor.

El objeto de este trabajo, por lo tanto, consiste en efectuar un análisis de este expediente, utilizando como fuente, además, las disposiciones legales y la doctrina. Para ello, partimos de una referencia general a las audiencias, los oidores, las disposiciones legales por las que se establecía la prohibición, la opinión que al respecto tenía la doctrina, el procedimiento para la instrucción de las causas y para la obtención de las licencias, las penas impuestas a los transgresores y la convivencia de los oidores con esta prohibición; para pasar luego al estudio de las actuaciones, con miras a indagar quiénes intervieron en ellas, en qué consistieron éstas, cómo se demostró el matrimonio y cuánto duró la investigación, concluyendo con unas consideraciones finales acerca de un suceso que conmovió al Buenos Aires virreinal y su proyección hacia el presente.
Las teorías medievales sobre el reino consideraban a la justicia como la primera obligación de soberano, por lo que el gobierno y español actuaba conforme a este ideal: el rey era el árbitro supremo de las disputas, la fuente de justicia, y el garante de equidad para el equivocado o el desafortunado.

Por lo tanto, y tal como lo sostienen Burkholder y Chandler, en Castilla, los Reyes Católicos consolidaron en parte su autoridad mediante el énfasis puesto en las leyes, como consecuencia de lo cual, durante su reinado, los organismos judiciales se convirtieron en órganos importantes de la administración real.

De todos estos organismos, el más destacado era la audiencia, que funcionaba principalmente como tribunal de apelación de las jurisdicciones inferiores, e instituciones de gran prestigio y tenían poderes para resolver asuntos judiciales, legislativos y ejecutivos. En los casos penales y la mayoría de los civiles, eran cortes de apelación dentro del territorio de su jurisdicción, constituyendo la última instancia con respecto a estas dos últimas cuestiones. En ausencia del ejecutivo, la audiencia se hacía cargo de sus funciones de gobierno y estaba investida de una autoridad muy amplia que la convertía en un importante órgano de control de otras instituciones gubernamentales.

Fernando el Católico y sus sucesores decidieron fundar audiencias en las principales ciudades de las Indias, como medida dirigida a establecer un firme control sobre aquellas tierras. Sin embargo, estos nuevos tribunales pronto ejercieron facultades muy superiores a las responsabilidades judiciales de sus antecesores castellanos.

Poco tiempo después del descubrimiento del Nuevo Mundo, se decidió establecer audiencias en las principales ciudades de América, comenzando por la de Santo Domingo en 1511 y siguiendo luego con la de México en 1527.

Gaspar de Villarroel afirmaba que la fundación de las audiencias reales se había encaminado “por la piedad de los reyes al bien común, a conservar los hombres en paz, a defender los pequeños de los poderosos, y a que en la tierra no falte la justicia” y que eran importantes para la tranquilidad y quietud de las repúblicas y para enfrentar el orgullo de la nobleza, ya que sin audiencias, “todo fuera beherería”, porque la nobleza era “por la mayor parte arrogada y engreída y es menester enfrentarla”, y que “esto sólo lo hacen con vigí las audiencias”.

2.1. La Audiencia de Buenos Aires

El 6 de abril de 1661 se decidió establecer una audiencia en Buenos Aires, ante la necesidad de asegurar la defensa del puerto y de contrarrestar el contrabando que se realizaba por el puerto de esta ciudad. Comenzó a funcionar en 1663, pero al extirpar casi totalmente el contrabando y sumirse la ciudad de Buenos Aires en una pobreza total como consecuencia de la eliminación de esta práctica, se multiplicaron las súplicas para que fuera levantada la prohibición de comercios, y como consecuencia de estos pedidos, fue suprimida por Real Cédula del 31 de diciembre de 1671, la que se hizo efectiva el 26 de octubre de 1672.

Un siglo después, el adelanto de estas provincias volvió a plantear el problema, y por Real Cédula del 14 de abril de 1783 se creó nuevamente un organismo de esa naturaleza en Buenos Aires, el que comenzó a funcionar el 8 de agosto de 1785.

Era tribunal de apelación de todas las causas civiles y criminales falladas por los jueces inferiores de su distrito, que eran los alcaldes ordinarios, los asesores letrados de las intendencias, que hacían poco se habían establecido y los gobernadores político-militares de Montevideo, Misiones y Malvinas.

Entendía en segunda o tercera instancia según cuál había sido el trámite dado anteriormente al litigio, y en los nuevos tribunales producto de verse expuestos a las decisiones de los jueces eclesiásticos. Este tribunal podía apelarse las resoluciones del Virrey, y a los intendentes expedidas en asuntos de gobierno.

Por una disposición dictada tres días después de instalada la Audiencia, el 11 de agosto de 1783, se implantaba en nuestro territorio la obligatoriedad de consultar al tribunal las causas penales como consecuencia de las cuales se debiera aplicar penas capitales o afeitivas, en cuyo caso éstas debían concluir forzosamente en la Audiencia.

En asuntos civiles de menor cuantía, en los criminales por delitos leves o faltas, podían sentenciar dos oidores, o un oidor y un condejo, pero en asuntos graves, el tribunal debía sesionar en pleno.

---

3 Ídem, pp. 14 y 15.

6 Villarroel, Gaspar de, Gobierno eclesiástico-pacífico, Quito, Selecciones, 1943, Clásicos Ecuatorianos, 1979, pp. 123 y 176.
9 Mena León, José María, "La Real Audiencia de Buenos Aires y la administración de justicia en lo criminal en el interior del Virreinato", en Primer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1952, p. 271.
El establecimiento de la Audiencia de Buenos Aires, en opinión de Maríluz Urquiijo, significó una mejora sustancial en la administración de justicia en el Río de la Plata, no sólo por la acción ejercida sobre los procesos que pasaban directamente ante el mismo tribunal, sino por la “imperiosa labor que desarrolló para mejorar y facilitar la labor de los magistrados locales y del interior”

La segunda Audiencia de Buenos Aires sobrevivió a la Revolución de Mayo, hasta que fue reemplazada en el “Reglamento de institución y administración de justicia”, dictado por el Primer Triunvirato, el 23 de enero de 1812, por la Cámara de Apelaciones10.

2.2. Los oidores

En la mano de esos ministros, quedaba “la vida, honra y haciendas”, de quienes acudían a ellos en busca de justicia11.

“Jueces son oíes buenos que son puestos para mandar y hacer derecho”, decían las Partidas12, y Pérez y López, agregaba que “siendo éste un encargo tan delicado, es preciso que sean personas en las cuales brille la ciencia, la pureza de costumbres, y muchas excelentes virtudes y cualidades, que las leyes desean y piden en ellos”13.

Gaspar de Villarroel afirmaba que “estas audiencias siempre se pueblan con excelentes sujetos de Salamanca”, y se preguntaba de quién podía ser el obispo fiar con gusto las cosas de su alma, sino de la virtud, piedad y letras de una audiencia. Aconsejaba que no se eligiera a los más ricos sino a los más virtuosos, “porque en un médico no atendemos a su riqueza sino a su virtud”, porque aquéllos que no atienden a lo que importa, sino a lo que adinan a sus reyes, “no son consejeros sino enemigos”14.

Juan de Solórzano Pereyra, recordando la alta función que ejercían los jueces, les recomendaba que debían proceder con modestia, templanza y costumbres, de suerte que los que viviesen debajo de su gobierno, protección y jurisdicción, “se mirasen en ellos como en un puro y cristalino espejo para imitarles”, y en otro pasaje de su célebre “Política Indiana”, afirmaba que era menos dañoso a la república que fueran sus reyes malo, que el serlo sus consejeros y magistrados, “porque si éstos son buenos, le detienen y enfrentan con sus consejos, y si éstos eran malos, le harían peor dejándolo correr con sus libertades”15.

8 Maríluz Urquiijo, José María, (n. 7).
9 Zorrilla, Berro, Aduana, (n. 6), p. 118.
11 Sr. 1.6.3.
12 Pérez y López, Antonio Xavier. Teatro de la legislación universal de España e India, por orden cronológica de sus cuerpos y decisiones no recopiadas; y alfabetico de sus cuerpos y decisiones no recopiadas; y alfabetico de sus títulos y principales materias, Madrid, 1792. “jueces”, p. 65.
13 Villarroel, Gaspar de, (n. 4), pp. 176 y 178.
17 Idem, p. 19.
18 Idem, p. 18.
19 Idem, pp. 168 y 172.
20 Idem, p. 172.
a efectos de lograr estos fines, según Burkholder y Chandler, "los medios usados fueron el escalafón, que casi automáticamente limitaba la duración de un magistrado en un lugar a unos cuantos años, las sanciones disciplinarias" y la prohibición de que los ministros se casaran dentro del distrito de la audiencia, sin licencia real.  

Para Burkholder y Chandler, “los asuntos del corazón” llevaban a más problemas, y entonces la Corona prefirió que el oidor tuviera una esposa penitual a la fecha de su nombramiento: un ministro soltero a menudo significaba futuros problemas de implicarse en la sociedad local.

Sin embargo, Mariluz Uquijo, menos romántico, piensa que “en una sociedad en la que los lazos familiares no sólo los de la familia nuclear sino los de la familia extensa-tenían gran fuerza y explican muchas solidaridades en el plano político o económico, se procura impedir que el magistrado o sus hijos casen en el país en el que ejerce su oficio para que no contraiga relaciones de parentesco que podrían torcer su juicio”. Compartimos con él que “estas precauciones se justifican mucho más en una época en la que el matrimonio no suele ser el resultado de una previa vinculación sentimental sino de una calculada estrategia dirigida a escalar posiciones o acumular riqueza”.  

El antecedente más remoto de la prohibición puede remontarse a una ley de Partidas que prohibía que el adelantado casara en su tierra, fundada en que éste podría usar su gran poder para forzar a alguna mujer a contraer enlace.  

En América, según Daisy Rípodas Ardanaz, ya en 1563 se tiene en cuenta la prohibición al redactar las Instrucciones para el primer Presidente de la Audiencia de Quito, a quien se advierte que no han de casarse en casas provincias, sin que la licencia Real, ni él ni sus hijos, hijas u otros parientes, y, un lustro después, al comprobar las del Virrey Céspedes, cuyas interdiciones matrimoniales se circunscriben a su propia persona y a sus hijos e hijas. Además, según la misma autora, “es posible que algunas referencias a interdiciones matrimoniales que aparecen en escritos de Virreyes de Perú y del Consejo de Indias con anterioridad a la Real Cédula de 1575 se hallan vinculadas a prohibiciones parciales”.

Finalmente, en 1575, una Real Cédula, incorporada luego a la Recopilación de Leyes de Indias, dispuso con carácter general para las Indias que ni los Virreyes, presidentes, oidores, alcaldes del crimen y fiscales ni sus hijos pudieran casarse en sus distritos sin licencia especial del Rey, durante el término de sus funciones. Rípodas Ardanaz atribuye...  

11 Ibídem, p. 175.  
12 BURKHOLDER, Mark A. - CHANDLER, Dewis S., (n. 1), p. 221.  
13 MARILUZ UQUIJO, José María, El agente de la administración pública en Indias, Buenos Aires, Instituto Internacional de Historia del Derecho Indígena, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1998, p. 344.  
14 Sr. 4.142.  
16 Rec. Ind. 2.16.82.  
17 Real Cédula del 10 de febrero de 1575, dada en Madrid: “El Rey. Por cuanto por visitas y residencias ya algunas otras relaciones que se han enviado y por experiencia se han visto algunos inconvenientes que se han el paso de estas medidas particulares a la prohibición general de la Real Cédula de 1575, al estímulo provocado “por las noticias que personajes eclesiásticos y funcionarios civiles habían ido haciendo llegar al Rey por esos años en torno del problema”.  

Y estas disposiciones fueron reiteradas a lo largo de todo el período de la dominación española en América.

Los motivos por los cuales se dictaron eran: que estos enlaces impedían que se desempeñara el cargo con imparcialidad; que gravísimos inconvenientes en la recta y pronta administración de justicia que producían este tipo de uniones; que convenía “el buen ejercicio de sus funciones y a la buena administración de la justicia” que los funcionarios estuvieran libres de parientes para que “sin afición hagan y ejerzan lo que es a su cargo y...
despachen y determinen con toda oportuna los negocios que conocieren"; y evitar recusaciones y otros medios para que se abstuvieran de conocer y que se despacharan los asuntos con rectitud.

Según Daisy Ripollas Ardanaz, estas normas persegüían una triple finalidad: salvaguardar el libre consentimiento de las contrayentes eliminando el peligro de posibles presiones de la autoridad, evitar conexiones que pudieran empañar la rectitud del que ejercía el poder e impedir el desdén familiar inherente a tratos matrimoniales que no llegaban a culminar por falta de la licencia.

Para Lohmann Villena,

"la estrecha prohibición de tomar por esposa a una oriunda del término jurisdiccional de la audiencia en la cual desempeñaban sus funciones, salvo especial autorización del Soberano-constituyó otro vano intento de mantener a los ministros exentos de todo compromiso y ajenos a las dependencias que se derivaban inevitablemente de emparentar con familias locales".

La Corona pretendía "que lo susodicho sea público y notorio, y ninguno pueda pretender ignorancia" y en este sentido disponía que "mandamos a los nuestros Virreyes, presidentes y oidores de las nuestras Audiencias Reales de las dichas nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano que hagan pregonar públicamente esta nuestra cédula cada Audiencia en las ciudades y pueblos de su distrito donde por nos fueren provistos y se proveyeren dichos gobernadores, corregidores y alcaldes mayores y que de la publicación en ella hagan que se tome testimonio en los libros del cabo de las dichas ciudades y pueblos donde se progonan y que en ellos queda asentada esta nuestra cédula y de haberlo hecho nos den aviso".

Para general conocimiento, esta orden debía leerse en una sesión plena de las audiencias, y darse fe de la lectura, pero según Ernesto Schäfer no parece haberse hecho esto, pues en 1586, el Consejo de Indias con referencia a un caso reciente relataba al Rey entre otras cosas:

"aunque esta cédula se envió por vías duplicadas a todas las audiencias, no se pregonó de ellas, y así quedó en los archivos, teniendo apercibidos y recelosos a los ministros para no incurrir en la pena si contravenía lo ordenado que fue la intención que se tuvo más que a ejecutarla con todo rigor, pues podríase ofrecerse algún casamento que no tuviese inconveniencia".

3.2. La pena

El castigo impuesto a los que se casaran en violación de la ley no incidía en la validez del matrimonio, que era tan válido para la Iglesia como para el Rey. En este sentido se pronunciaba Solórzano, al sostener que "por ellas no quitan los Príncipes que las promulgan, el valor y fuerzas de estos casamientos, pues si llegan a hacerse válidos, firmes y verdaderos se queda".

La pena era la privación del oficio para el presente y el futuro, y alentó a que el rey se huba anoticiado de que algunos iniciaban tratativas con la esperanza de que se les iba a dar el permiso, el castigo se extendía aún a quienes realizaban el intento, aunque luego no se casaran, quienes serían pasibles de la misma pena. Es por ello que el rey, en varias oportunidades, reiteraba que no pensaba dar las licencias.

A partir de Felipe II se insinuó la conveniencia de penas pecuniarias, castigo que no se mencionaba en la Recopilación. Tal vez por esta razón, y hacia 1800, los ministros que contravenían matrimonio sin contar con la licencia real tenían más probabilidad de ser destituidos que multados.

Para Schäfer, "a pesar de todas las amenazas de rigor el castigo por casamiento en el distrito generalmente se limitaba solamente a un traslado".

---

93 Consulta del consejo de las Indias sobre la prohibición de casarse los oidores en su distrito. Madrid, 5 de febrero de 1586, en KONITZER, Richard, Colección de Documentos para la Historia de la Formación Social de Hispanoamérica. 1492-1810, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958, n.
94 RÍPOLAS ARDANAZ, Daisy, (n. 26), pp. 344-346.
95 LOHMANN VELLENA, Guillermo, Los Ministros de la Audiencia de Lima en el reinado de los Borbones. 1700-1821. Esquema de un estudio sobre un núcleo dirigente, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1974, pp. 61 x y lxxi.
96 VIVIANA, 15 de noviembre de 1592.
97 SCHÄFER, Ernesto, El Consejo Real y Supremo de las Indias. II. La labor del Consejo de Indias en la administración colonial, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1947, p. 122.
Muchas veces la Corona tenía que enfrentarse, especialmente cuando había mujeres de clases más bajas implicadas, con el concurrido o el amancebamiento de los oidores. Entonces, cuando Madrid recibía noticia de un escándalo causado por alguna “ilícita amistad” de un juez, la reacción era realizar un cambio de destino, y a menudo conducía a un retiro forzado.49

Para Burkholder y Chandler, “los magistrados culpables de desconducta o alguna otra ofensa podían sufri ser suspensión o recibir un humillante despido sin ni siquiera una cuarta parte del salario. En casos extremos, un juez podía ser echado, multado, y exiliado de la corte y de las principales ciudades”, por lo que “un magistrado que apareciera culpable de una ofensa menor o fuera parte de un escándalo celebrado podría ser transferido temporalmente a otra corte mientras la investigación tenía lugar”46.

En cuanto a los salarios, Solórzano opinaba que “después de un tiempo dejarían los salarios de su plaza al que contravino y que tiene obligación de restituirlos en ambos weier”47. En el mismo sentido, Felipe III mandaba a los oficiales de la Real Hacienda retener los fondos del día en que les constase que el infractor hubiese concertado el matrimonio48.

3.3. Las licencias

El texto de la Real Cédula de 1575, abría la puerta a que el oidor pudiera contratar matrimonio con mujer residente en su distrito, mediante la dispensa del Rey, partiendo del supuesto de que “quien ha instituido una prohibición tiene la potestad de dispensar de ella”49.

Quienes solicitaban el permiso podían ser el mismo oidor, quien podía pedir la licencia para casarse con una mujer determinada, o con cualquier mujer del distrito, o las mismas mujeres, ya se trate de la futura contrayente, o de cualquier mujer del distrito, quien podía requerir la dispensa para casarse con cualquier oidor, y hasta encontrarnos oidores que se dirigían al Vírreyn, pidiéndole que le consiguiera la candidata, dentro de su propio distrito45.

A veces pedían permiso por anticipado, es decir, sin mencionar el nombre de la candidata, con el objeto de poder contraer matrimonio luego, cuando encontraran la mujer que les agradara dentro de su distrito46.

47 Ibid.
48 Solórzano y Perea, Juan de, (n. 15), N° 71.
50 Ibid., p. 342.
51 Konetzke, Richard, (n. 31), consulta N° 564 y N° 562 (año 1693) N° 562 (año 1782).
52 Idem, Consulta efectuada en Madrid, 5 de enero de 1586, Madrid, 28 de marzo de 1690, Madrid, 28 de julio de 1692; Madrid, 29 de julio de 1782; Madrid, 27 de septiembre de 1790 y Madrid, 10 de junio de 1793.
53 Idem, consulta N° 564.
54 Idem, consulta N° 564.
55 Idem, consulta N° 564.
56 Según Ripodas Ardanaz, “frente a cada caso, el monarca de turno se pronuncia sin caerse a normas fijas, de suerte que sólo puede intentarse una caracterización provisio nal del criterio dominante en cada momento a través de la consideración de las soluciones dadas a algunos casos conocidos, caracterización que, como provisional, ha de resultar pasible de excepciones y, lo que es más, ha de quedar sujeta a retocados o correcciones de fondo en la medida en que se analicen nuevos casos que no se compadezcan de ella”.55

En ocasiones, “los interesados ponían en práctica distintas efigias para sortear la valla de la prohibición. Algunos contrataban esposas con persona del distrito que se ausentaba por algún tiempo y aparecía luego como forastero, con el fin de evitar la transgresión encubierta” y “alguno disponía a propósito y que para que pueda permitirse el matrimonio en estos casos debe de haber mediado por lo menos un plazo de diez años entre la partida del que se ausenta y su retorno”.55

Otros recurrían a un matrimonio secreto y, si los que se habían casado eran sus hijos, alegaban que lo habían hecho sin su consentimiento, lo cual era una “pobre excusa pues lo que determina la pérdida del oficio según la ley no es que haya mediado consentimiento del padre sino que se haya producido el casamiento”.55

Con respecto a la frecuencia de la concesión de las licencias, la actitud de la Corona varió durante los cinco siglos que duró su dominio en América.

Según Ripodas Ardanaz, durante el reinado de Felipe IV se pueden distinguir dos momentos en lo que hace al otorgamiento de licencias matrimoniales:

“el que coincide con la prisión del conde-duque de Olivares, en el que, con concediéndose licencias con cierta facilidad, hace camino el uso de obtenerlas contra un elevado servicio pecuniario que ingresa a la Real Hacienda, y el posterior a la prisión en el que, encareciéndose los daños que padece la administración por las vinculaciones emergentes de los matrimonios y los clamores de los vasallos de Indias al respecto, se rezagaban los permisos y se priva de sus plazas o, al menos, se suspende a varios oidores que, contraviendo las interdiciones, se han casado ellos mismos o han casado a sus hijos, de donde resulta que otros recurren al arbitrio de matrimonios secretos, solemnizados a veces al cabo de mucho tiempo”.57

Luego, en tiempos de Carlos II, según la misma autora,

“se observa una política moderada en la materia, dentro de la cual en 1685 se esboza por el Rey cierta tendencia a una mayor rigidez, presumiblemente...
no ajena al alejamiento del primer ministro Duque de Medinaceli, pero continúa el uso de los servicios pecuniarios que se reparten por mitades entre el Real bolsillo y la Cámara de Indias.98

Para la autora, el cambio de dinastía “no incide de manera demasiado notable en lo relativo a licencias matrimoniales”, ya que “Felipe V las sigue otorgando contra servicios pecuniarios cuyo monto discurte a veces prolijamente, y lleva hasta a levantar la sanción recaída sobre algún desobediente en atención a que ha entregado al Erario una fuerte suma. Con todo, se observa cierta prudencia a denegar tales permisos –ya sea para el matrimonio de los funcionarios o para el de sus hijos– en nombre de los perjuicios al bien público y al Real servicio ocasionados por ellas99.”

Bajo Fernando VI continuó, en líneas generales, el régimen de servicios pecuniarios. En el reinado de Carlos II se volvió a este sistema, consistente en el pago de sumas que variaban entre 2000 y 4000 escudos100, mientras que durante el reinado de Carlos III, a la par que adopta medidas restrictivas, “suele conceder licencias de matrimonio con larguezas, y sin que –práctica sugerente– medie servicio pecuniario alguno101.”

Finalmente, en la época de Carlos IV “parecían advertirse indicios de rigor en el castigo de los infractores y cierta dureza para el otorgamiento de licencias102.”

Para Rípodas Ardanaz, “en conjunto, la política de austerias y borbones en materia de matrimonios de funcionarios resulta confusa no sólo porque las prohibiciones generales se obvian frecuentemente a través de licencias sino también porque ciertas interdicciones especialmente duras datan de períodos en que esas licencias se conceden con facilidad” y “tales discrepancias pueden explicarse como producto de tensiones permanentes entre polos”: en un extremo, “la existencia de un decreto de Felipe V de 31 de marzo de 1720 en el que se observen en adelante las leyes”, marca el ideal jurídico de actamiento a las normas generales vigentes; en el otro extremo, la comprobación empírica de que, no obstante el decreto, “posteriormente han sido muy frecuentes estas dispensas”, marca la necesidad práctica de buscar soluciones casuísticas que no pierdan de vista la multiplicidad de situaciones personales, particularmente ricas en lo que hace a achaques matrimoniales103.”

89 Idem, pp. 345-346.
90 Idem, pp. 346-347.
91 MARILUZ UNICO, José María, (n. 24), p. 346.
92 RÍPODAS ARDANAZ, Daisy, (n. 26), p. 347.
93 Idem, p. 348.
94 Idem, p. 344.

Por lo tanto, la política real en materia de dispensas fue muy caótica y casuística, sin que hubiera un criterio uniforme y sin que se pudieran establecer períodos ni dinastías, en general, que adoptaran una posición uniforme respecto a lo que se concedía o no.

Quienes debían hacerse cargo de la suma necesaria para pagar la licencia, podían ser el mismo oidor104 o el vecino, padre de la futura contrayente, e incluso ésta misma105.

Con respecto a la necesidad del traslado del oidor que obtenía la licencia, a otra plaza, la política de la Corona tampoco fue uniforme, y hubo casos en los que se concedió la licencia sin mediar traslado106.

¿Por qué motivos la Corona estaba dispuesta a conceder la licencia? ¿Qué parciales circunstancias mediaban en cada caso para hacer que el Rey se apartara de sus disposiciones, o hiciera lugar a la dispensa? Los motivos podían ser varios: los buenos servicios a la Corona que hubiera prestado el solicitante107, su justificación y limpieza108, su edad avanzada para seguir soltero109, su “cortesía de medios”110, la imposibilidad de haberse casado antes, debido a los constantes traslados111, la dificultad en encontrar mujeres que se quisieran trasladar112, la buena conducta del pasado, que constituía una garantía de que no se incurriría en el futuro en los peligros que se tuvieron en cuenta para establecer la prohibición113, la falta de publicidad previa de la disposición en la audiencia en la que prestaba sus servicios el peticionante114, ser único sucesor en un mayorazgo115, la integridad, justicia e imparcialidad del solicitante116; o simplemente, que la futura familia política del oidor no residía en el distrito, sino que sólo tenía sus negocios en él117.

¿Cuáles eran las ventajas, para quienes gestionaban y otorgaban estas licencias, de acceder a ellas? Entre las razones expresadas en las consultas y disposiciones que compusimos, encontramos: evitar los riesgos del celibato118, lograr “un preciso decreto sustancioso”119, el afianzamiento del bien120 y el gran desconocimiento que sería para los naturales de Indias, quienes sentirían que se les cerraría una puerta121.

88 Idem, consulta N° 70 y 564.
89 Idem, consulta N° 553.
90 Idem, consulta N° 564, año 1690, N° 553 año 1688 y N° 10, año 1692.
91 Idem, consulta N° 319, año 1790.
92 Idem, consulta N° 564, año 1690, N° 10, año 1692.
93 Idem, consulta N° 335, año 1793.
94 Idem, consulta N° 10.
95 Idem, consulta N° 319, año 1790.
96 Idem, consulta N° 319.
97 Idem, consulta N° 429, año 1586.
98 Idem, consulta N° 335, año 1793.
99 Idem, consulta 335.
100 Idem, consulta N° 429 Consulta del consejo de las Indias sobre la prohibición de casarse los oidores en su distrito, Madrid, 5 de febrero de 1586.
101 Idem, consulta N° 335.
102 Idem, consulta N° 335.
103 Idem, consulta N° 335.
104 Idem, consulta N° 521, año 1685.
3.4. La doctrina

El tema no faltó en muchas de las más importantes obras de la época, y en este sentido se ocupan de la cuestión Juan de Solórzano Pereira, quien era parte interesada en el tema, ya que él mismo era oidor casado con criollas, Diego de Avendaño, Gaspar de Villarroel, Juan de Matienzo y Bernardino de Figueroa y de la Cerda, este último oidor de la Real Audiencia de Santiago y luego de la de Lima, quien le dedica un trabajo especial.

Algunos autores justifican la prohibición, señalando que:

“...donde así ellos, como los autores que comentan, hacen razón de ello, el decir que el miedo es impresión que causa ó puede causar á los súbditos el mando y autoridad de sus cargos, hace faltos de libertad y sospechoso de violencia y tyrannia semejantes matrimonios. Y que aun cuando esto fallase, se impide por causa de ellos la libre administración de justicia por los parentescos, familiaridades, amistades y otros muchos embarazos y dependencias que suelen ocasionar”

Según Mariluz Urquiola, “en general, los afectados por la prohibición lo miran con escasa simpatía, la critican total o parcialmente y se inclinan a propugnar una interpretación restrictiva”. Así, Matienzo “considera conveniente tener raíces en la tierra donde se actúa para amarla más y velar por ella más que otros que esperan abandonarla”, mientras que Figueroa y de la Cerda insinúa que el no conceder licencias para casar en el distrito empieza al concurso, ocasionando conexiones más peligrosas que las originadas de un matrimonio legítimo pues, al ser clandestinas, resultan más difíciles de detectar.

En líneas generales, el autor estima conveniente la existencia de un régimen de licencias que habilita a los funcionarios para la contracción de los matrimonios prohibidos. Con ellas se favorece la buena administración de justicia dado que, mientras que el juez casado debe abstenerse de entender en las causas de los parentes de su mujer, no sucede otro tanto con el juez amanecido respecto de los de su concubina; con ellas se posibilita que las jóvenes de Indias se casen con hombres de estudio y de virtud, a satisfacción de sus padres para honor de sus familias. No obstante, por fin, las licencias, la puerta a los abusos: la experiencia prueba que el respeto a la autoridad del Virrey y la probidad de los oidores casado in situ se encargan de cerrarla.

La Recopilación de Leyes de Indias, estableció que eran competentes en estas cuestiones los Virreyes y presidentes de audiencias en las que sirvieron los oidores, quienes debían escribir y hacer las informaciones que convinieran ante el escribano de cámara, “procediendo con cuidado, recato, enterza y limpieza”, y dar cuenta al Consejo de Indias.

Según Solórzano, se les ordenaba que “estén muy vigilantes en hacer que se observen y en ejecutar la pena de ellas contra los transgresores”, “yando luego aviso, para que se prueben sus plazas, y que los Presidentes que estuvieran subordinados a Virreyes, le remitan a él los papeles”.

Sin embargo, en 1793, Carlos IV dictó una resolución por la que estableció que los ministros que fueran a contraer matrimonio con personas no naturales de sus distritos, no tendrían necesidad de solicitar licencia Real sino sólo la del Virrey o de la autoridad superior.

Para Solórzano “si notoriamente consta del casamiento ó de su concubinato, los Virreyes y Presidentes... son como meros y puros Ejecutores de dichas cédulas y sólo proceden á declarar, que los transgresores incurrieron Ipso facto en las penas de ellas”. Pero

“si el punto de la contravención no está muy claro ni suficientemente probado, entonces brevemente y de plano forman proceso, y según lo que resulta de las declaraciones de testigos y demás diligencias que mandaron hacer, ó de inciso en la Asistente, ó de absolución de la instancia, ó de envíos los autos al Consejo con su parecer, para que él se tome la resolución que convenga”.

En los casos dispensados, los interesados se dirigieron al Rey pidiéndole la licencia, y éste la giró al Consejo de Indias para que emitiera opinión. A veces, durante la

46 SOLÓRZANO Y PÉREZ, Juan de, (n. 15), N° 70.
47 Rec. Ind. 2.1686: “Que los Presidentes conocen de causas de casamientos y parcialidades de Oidores, y otros Ministros, y los de audiencias subordinadas remitan las informaciones al Virrey, y dé cuenta al consejo. D. Felipe III en Madrid á 20 de Noviembre de 1621. Y en esta Recopilación: Declaramos que cuando sucediere casarse alguno de los Ministros prohibidos, ó sus hijos, ó convertir de casarse en sus distritos, ó haber parcialidades de Oidores, ó otros Ministros, toca al Presidente de la Audiencia, como punto universal, escribir y hacer las informaciones, que convengan, ante el escribano de Cámara, que elegire, y mandemos que si la Audiencia fuere subordinada, haga las informaciones, y las remita al Virrey, y le dé cuenta de todos, y conforme a lo que resultare proceda el Presidente, y avise al Consejo”.
48 RÍPÓDAS ANDUZ, Daisy, (n. 26), p. 337, correspondiente a la Consulta de la Cámara de Indias del 31 de julio de 1791.
49 SOLÓRZANO Y PÉREZ, Juan de, (n. 15), N° 71. Y continúa el mismo autor: “Y cuando juzgan haver contraído, se les, para mayor caustic, pronunciar sentencia declaratoria de las penas en que han incurrido, aunque estas se hallan impuestas ipso jure, siguiendo la manera común opinión...Lo cual sentencia se retrotrae, y tiene como por dada y pronunciada desde el mismo día de la contravención”.
50 KENWICK, Richard, (n. 31), consultas N° 429; 521; 533 y 10.
sustanciación de la causa, se podía que se hicieran otras diligencias, tales como que se propongan 69, o en algunos casos, se aconsejaba el traslado del oidor 70. En ocasiones, hasta se requirió al Presidente de la audiencia que diera el visto bueno a la candidata 71.

En la mayoría de los casos, el Rey resolvía conforme el dictamen 72, aunque hubo casos en los que resolvió en contra del parecer de la Cámara, denegando el permiso 73 y aún contra el parecer del fiscal 74.

En alguna oportunidad, hemos visto que la licencia se concedió haciendo referencia a que se hacía excepción de la real cédula, manifestado que era “por esta vez y para en cuanto a esto toca, dispuesto con ella”, con lo que se quería dejar expresamente aclarado que la prohibición seguía vigente. Creemos que en este caso la aclaración se debió a que la licencia se concedió previo pago 75.

4. El delicioso encanto de lo prohibido o cómo convivir con la prohibición

Según Lohmann Villena, “las disposiciones restrictivas se dictaron desde que ocurrieron los primeros casos de uniones de ministros con oriundas de las Indias, entre los cuales se registra el del Oidor de la Audiencia de Lima, Venegas, en 1574” 76.

¿Pero qué sucedía en la realidad? ¿Qué motivos ocultos habrían impulsado a los ministros de las audiencias americanas a querer contraer matrimonio con mujeres residentes en sus distritos? ¿Cómo conviven los ministros con la prohibición?

Para Burkholder y Chandler, “el deseo de enriquecerse que habían impulsado en primer lugar a trasladarse a América era un estímulo más para establecer relaciones poco fáciles con familias locales” 77. Y entonces, a pesar de la prohibición, los sueldos bajos determinaban que a lo que más aspiraba un oidor fuese justamente, que su nombre se perpetuara en la sociedad virreinal, y a dar brillo a su familia a través de su casamiento, o el de sus hijos, con prominentes figuras de la sociedad local. Según estos autores, “era tradicional que los magistrados de las audiencias pensaran en el matrimonio como medio de perpetuar su nombre y su estirpe, además de los beneficios materiales que podían obtener” 78 y “en las últimas décadas de la dominación española los magistrados en funciones generalmente se opusieron a la aplicación de las restricciones restrictivas”. Uno de los motivos de esta actitud era que “muchos ministros habían visto a familias de colegas en la pobreza por

la prematura muerte del padre, y la posibilidad de que sus esposas e hijos sufriera un destino semejante estaba siempre presente en sus cálculos”. Por eso, “el típico ministro de la justicia de fines del siglo XVIII, tenía un gran interés en que sus hijas se casaran bien, y por ello consideraba excesiva la severidad de las leyes referentes al matrimonio” 79.

Es que “tales casamientos proporcionaban ventajas a ambas partes: conferían privilegios de protocolo a la esposa del lugarteniente; incrementaban los recursos económicos (y por ende el nivel social) del contrayente y daban a las familias vernáculas de contactos muy eficaces con personajes de las esferas dirigentes” 80.

Para Burkholder y Chandler, “es muy probable que, en el caso de la mayoría de los magistrados de 1778 a 1808 formaron parte de los altos tribunales, los matrimonios con damas de familias localmente prominentes los beneficiaran más a ellos que a la familia en que eran nacidos, pues según parece lo que más atraía eran las condiciones económicas de tales familias en una región dada, independientemente de la política seguida por el real gobierno. Así, por ejemplo, en el caso de Guatemala, de 1550 a 1850 los oidores y otros altos funcionarios trataron de entrar a formar parte de la élite de comerciantes-empresarios, mientras en cambio durante casi todo el siglo XVIII eran las familias ambiciosas las que procuraban atraerse a los ministros de la justicia. Mas las ventajas representadas por un salario seguro y por la influencia en el siglo XVIII en regiones donde el capital era escaso pronto tendieron a desaparecer en las provincias donde hubo una rápida expansión económica hacia fines del siglo XVIII, circunstancia que puede contribuir a explicar por qué en Lima, situada en una zona que en cierto sentido quedó fuera de la tendencia general al desarrollo económico, los magistrados siguieron contrayendo matrimonio con damas de familias coloniales prominentes. Las familias inteligentes, además, también percibieron que la mejora de las comunicaciones y la llegada de nuevos funcionarios, especialmente los intendentes, iban a marcar considerablemente el poder de las audiencias. Por ello y porque los ministros de la justicia no dejaron de tener atractivo como posibles yernos, ya no se les procuraba con tanto interés como a sus predecesores” 81.

Aún así, no todas las mujeres estaban dispuestas a unir sus destinos a estos magistrados indios. Es que en realidad, la vida que le tocaba a mujeres a muchas de estas casas, consistía en estancias más o menos prolongadas en una sede auditiva, seguida del traslado a una nueva, con la precisión de tener que levantar su casa y volverla a instalar, después de un dilatado –y en ocasiones– riesgoso viaje, que ponía a prueba la resistencia

69 Idem, consulta N° 529.
70 Idem, consulta N° 429.
71 Idem, consulta N° 262, año 1782.
72 Idem, consulta N° 564 (se pagó) y N° 10, idem.
73 Idem, consultas N° 335 y 262.
74 Idem, consulta N° 262 año 1782.
75 Idem, consulta 533.
77 BURKHOLDER, Mark A. - CHANDLER, Dewitt S., (n. 2), p. 22.
78 Idem, p. 160.
física y a menudo sólo permitía transportar muy pocas de las pertenencias del antiguo hogar. Según Ripodas Ardanza,

“empiezan a producirse con frecuencia casos de amancebamiento, y no necesariamente siempre por aversión de las partes al sacrificio del matrimonio: son sus protagonistas oidores y otros altos funcionarios que, teniendo prohibido casarse en sus distritos recurren a relaciones más o menos furtivas con hijas de familias de pro, con las que de buena gana las legitimarían y con las que en efecto las legitiman muchas veces exponiéndose a la pérdida del empleo, ya con otras jóvenes menos distinguidas que, deseosas de casarse, pero sin medios económicos para hacerlo en forma ventajosa, consienten en amancebarse con quienes saben que no han de llegar al matrimonio pero de quienes esperan, en cambio, que más adelante las casen con algunos de sus criados, después de haberlos dotado convenientemente, lo que, en efecto, acontece en más de una ocasión. Si tales amancebamientos trascienden al dominio público, el escándalo —que impone a veces la intervención eclesiástica y aún regia— raya a la altura de la escandalidad del galán y adquiere contornos de comedia de capa y espada, cuando no de farsa, al culminar en escandalizamientos, rapto, enamoradas vestidas de hombre y galanes vestidos de mujer.”

Por otro lado, y tal como lo sostuvo Ricardo Palma, “pues un oidor es un hambre de carne y hueso, había de casarse como nos casamos todos”, recordando las palabras de Felipe II en el sentido de que las influencias de familia colocaban al magistrado en condición propensa a la injusticia o fácil al cohecho, el que quería vender justicia la vendía, “como Judas a Cristo, sin pararse en menudencias ni en pamplinadas penales.”

Para Ripodas Ardanza, “las prácticas matrimoniales, basadas en el supuesto de que razón y sentimientos no eran compatibles, llevaban a uniones convenidas en vista de consideraciones socioeconómicas y no de un mutuo amor”, hasta tal punto que “a los protagonistas no les causaba rubor admitir lisa y llanamente que la dote de la novia había sido el incentivo que lo llevaba a casarse.”

Y entonces,

“cuando un oidor en Lima, por ejemplo, hasta de una soltería pecaminosa o de una viudez indeseable que le impusiera castidad forzada, aspiraba a la media marana que le hacía falta, escribía a uno de sus compañeros de armas de México, Quito o Chile encargándole que le buscara esposa, determinando las cualidades físicas y morales que en ella se co-

diciaban, y aún estableciendo la cifra a que la dote debía ascender. Otros dejaban la elección al buen gusto y lealtad del comprador.”

Así, el casamiento de un oidor era, “en toda la acepción de la frase, lo que se entiende por matrimonio a fardo cerrado, ni por nuestra concepción la mercadería antes que la despachase la aduana”. De ahí que, salvo raras excepciones, “los matrimonios de oidor en Lima anduvieron mal avenidos y fueron semillero de escándalo” independientemente de que se esperara que los hombres públicos fueran un modelo de comportamiento para la sociedad. Para Richard Kagan, el aislamiento era un precio que el oidor debía pagar por su elevado rango.

Sin embargo, a las familias prominentes les molestó profundamente que la corona aplicara con tanto rigor las restricciones relativas al matrimonio. Burkholder y Chandler sostienen que “el que en verdad irritaba más a los criollos era la limitación arbitraria de su acceso a los cargos de poder y de sus posibilidades de obtener ganancias materiales” y que “indudablemente fue la conciencia de esta irritación ante el reciente rigor demostrado en la aplicación de los reglamentos que indujo a Arredondo a aconsejar el matrimonio de tres o cuatro ministros de la audiencia de Lima con damas de las primeras familias, con el objeto de elevar el estado de ánimo y la lealtad de la sociedad local.”

Debido a este impedimento, “en la práctica, el ministro que no optaba por el celibato perpetuo y se decidía a constituir familia con arreglo a la normativa canónica y civil, tenía ante sí una de las cuatro alternativas: el matrimonio secreto; el subterfuego de atribuir a su futura esposa una oríundy inconsciente, recurriendo a una residencia ficticia, la dispensa concedida como una gracia real, o finalmente, obtener la licencia a título oneroso.”

Así, a pesar de las severas leyes que lo prohibían, los ministros de ministros de audiencias con señoríos de las familias importantes se convirtieron en medios indirectos y en muchos casos sumamente efectivos de fomentar el florecimiento de los intereses criollos.

Ya durante el reinado de Felipe II, bajo el cual se fue plasmando el sistema prohibitivo, hay indicios de que abundaban los funcionarios y los hijos de funcionarios casados en el seno de la aristocracia encomenderal mercantil de sus jurisdicciones.

A pesar de las prohibiciones, siempre estaban presentes las necesidades económicas de la Corona, y entonces.

---

100 Palma, Ricardo, (n. 104), p. 9.
104 Lohmann Veleda, Guillermo, (n. 33), p. 132.
“los criollos, ansiosos de obtener cargos en los tribunales locales, se precipitaban en masa a España con los bultitos abiertos, y ahí la Corona recibía sus ofertas con gran atención porque sus impedimentos legales los obligaban a pagar altos precios por unos nombramientos que les fueron concedidos en número sin precedente con todo y que eran representantes de intereses contrarios a los de la misma Corona”.

Burkholder y Chandler consideran que

“esta generosidad oficial, tan forzada, junto con la venta de dispensas para contratar matrimonio o adquirir propiedades inmuebles, dieron por resultado una mayor debilidad de la autoridad real porque permitieron el establecimiento de lazos legalmente válidos entre los administradores de la justicia y el resto de la población”.

En Lima, por ejemplo, para Lehmann Villena, “la clasificación social de las esposas demuestra una tendencia a entrar en contacto con los elementos de significación dentro de los grupos preponderantes en la administración virreinal” y de las estadísticas “se viene en conocimiento que el número de enlaces con criollas es cuantioso”.

Según Burkholder y Chandler “los ministros protagonistas de amores tempestuosos o con graves problemas consagrados dieron innumerables dolores de cabeza a la Corona por la consecuente crítica del público y la perplejidad oficial”. En un principio, las autoridades, que en vez de resolver los problemas aislados, junto a estos, en muchos casos sencillamente alejaban a los transgresores cambiándoles de tribunal y “mucha veces se casaron con damas de la localidad sin obtener la licencia correspondiente, cosa que no fue causa más que de la oscuridad de una multa”.

Lehmann Villena da cuenta de una “alta cuota de infidelidades que suceden a los atractivos de las mujeres del país”, concluyendo, “después de haber desarrollado varias maldad familiares” que “los ministros de la audiencia de Lima se incorporaron a la flor y nata de la aristocracia de la tierra, a los grupos de poder económico a la alta burocracia” y que “es inescusable que a través de estas relaciones familiares la nobleza peruana, como la de Roma y la de Inglaterra, estuviera profundamente identificada con la autoridad, y su predominio dentro de la Audiencia no puede desestimarse como un factor de positiva gravitación política”.

A pesar de que Lehmann Villena registra el fracaso de la política prohibitiva en el Perú, según Ripodas Ardanaz, “es harto probable que en otras Audiencias se dieran situaciones semejantes”.

En el caso de la Audiencia de Buenos Aires, por ejemplo, cuyos integrantes contaron entre 30 y 50 años de edad, en su mayoría fueron casados, y no sabemos si la rigidez de las normas sobre el matrimonio de los funcionarios, o tal vez las circunstancias de la vida, determinaron que tres de sus miembros permanecieran solteros: Lucas Muñoz y Cabeza, José Cabeza, y Manuel Reyes y Borda.

Muñoz y Cabeza, Manuel de Arredondo, Joaquín Bernardo de Campuzano y Salazar y Tomás Ignacio Palomeque solicitaron autorización para contraer matrimonio con damas locales, y en todos los casos, con excepción de Palomeque, al que nos referiremos a continuación, les fue negada.

Muñoz y Cabeza, Cabeza, y Reyes y Borda murieron solteros, Arredondo casó dos veces, mientras Campuzano y Palomeque fueron protagonistas de sendas historias de amor.

5. El matrimonio del oidor Tomás Ignacio Palomeque

Corren los primeros meses de febrero de 1786, cuando el virrey del Río de la Plata, Marqués de Loreto, se hace eco de la “pública voz” que se escucha en Buenos Aires, acerca del matrimonio del oidor de la Real Audiencia de Buenos Aires, Tomás Ignacio Palomeque con Andrea Altuzary, sin haber solteriado y obtenido la licencia real.

Desde su despacho, constituido el Virrey, tal como lo definió Victoria de Villalobos en “agente de cada negocio” para estimular a los demás con el ejemplo, el “obscuro e incomprensible” Loreto decide activar todo el mecanismo burocrático virreinal.

El expediente comienza con un proveído de fecha 7 de febrero de 1786 por el que Loreto, acusa recibido de “algún especie” que pueden ser habilitadas”, pero que “no serían jamás reconocidas con impunidad”, dejando de salir con tiempo a su reparo.

A tiempo de evitar las consecuencias, el Virrey alude a cierta “comunicación estrecha de algún ministro de la Audiencia con gente del pueblo”, pero sin estar seguro aún de quién se trata. Según Loreto, no se sabe si este contacto es “amistad estrecha o enlace”, y pese de sus dudas, sospecha que es el Señor oidor Don Tomás Ignacio Palomeque. El Virrey opina que si lo que se escucha no es verdad, “se reconocerá y evitará de contraerse con la ley”, y si no lo es, el oidor deberá pedir providencia.

A partir de ahí, comenzará un expediente, en el que todas las actuaciones se desarrollarán vertiginosamente, en días y horas inhábiles. El mismo día de su primer proveído, el 7 de febrero de 1786, ordena mandarle un oficio a Palomeque.

Pero quién es este funcionario que osa desobedecer las reales disposiciones, poner en funcionamiento la maquinaria de la Corona y dar que hablar a todo un pueblo?

120 Archivo General de la Nación. Sala IX. Tribunales IX 32-4-2. “Tres expedientes con motivo del casamiento del oidor de esta Real Audiencia Pretoria Don Tomás Ignacio Palomeque”. 
Sabemos que su nombre completo era Tomás Ignacio Palomeque de Céspedes, que había nacido en Fuenteovejuna, Córdoba, España, aproximadamente en 1756, y que era hijo legítimo de don Fernando Palomeque, también nativo de Fuenteovejuna, y de doña Francisca de Tenes y Gordillo, nacida en Usagre, Badajoz.

Había recibido su título en derecho canónico de la Universidad de Alcalá y había sido participante en su Academia de Derecho. En 1776 el Deán y Capitular de la catedral de Córdoba lo presentó para una beca en derecho canónico en el colegio Mayor de San Clemente en Bolonia. Permaneció allí, estudiando y compitiendo con éxito en 1780 por una vacante en derecho canónico en la Universidad de Bologna, hasta que el 12 de julio de 1783 fue designado oidor de la próxima a instaurarse Audiencia de Buenos Aires. En 1784 era miembro de la Junta Superior de Real Hacienda en Buenos Aires.

En la época en que se suscitaron los acontecimientos de que nos ocupamos en este trabajo, tenía 30 años y una brillante carrera de funcionario por delante.

¿Cuál es el contenido del oficio, por el que el Virrey Loreto anoticia a Palomeque de que está al tanto de los sucesos que lo tenían por protagonista?

El Virrey trata de justificar la remisión del oficio a Palomeque, sosteniendo que la gente es chismosa, y que son notorios “las experiencias de facilidad con que las gentes, cuando no inventan, abultan, por indiscreción, o de malicia”. Loreto se preocupa por dejar sentido que está actuando cuidadosamente, y que, si bien no está demostrado seguro de quién es el sujeto, si todo no son más que habladurías, está bien haber sido cuidadoso y evitado lastimará a la gente. Como recuerdo que se convertirá en una constante a lo largo de todo el expediente, le encarga “sigilo y pulso”.

Este oficio que Loreto le envía a Palomeque y su respectiva respuesta, constituyen el único contacto que va a existir en las actuaciones entre el Virrey y el oidor.

Y también en línea con la inmediatez y celeridad que caracterizaron a este expediente, Palomeque responde al día siguiente. En su descargo, manifiesta “V.E. conoce la facilidad con que los ociosos hablan, censuran y abultan novedades, y suponen escándalos”, con lo que no duda en juzgar a la gente como chismosa y que inventa o agranda las cosas. Hombre político al fin, Palomeque es consciente de que el hombre público vive muy expuesto y tiene enemigos, pero para él no hay que darle al asunto mayor importancia. No reconoce ni niega expresamente que ha contraído el matrimonio, pero sin embargo se pone a disposición del Virrey para dar las explicaciones que éste le requiera.

El 25 de febrero de 1786 Loreto ordena librar oficio al “Diputado Eclesiástico que hace de provisor en sede vacante”, el Arzobispo de la Santa Iglesia Catedral, Miguel José de Riglos.

Este primer oficio dirigido a Riglos, se libra el mismo día en que se ordena, el 25 de febrero de 1786, y como muestra del apuro que tenía el Virrey en que sus indagaciones se satisficieran, le indica el edecán que espere hasta que puedan despacharle la respuesta, y el oficio es entregado el mismo día.

¿Cuál es el contenido de este oficio? El Virrey Loreto encara directamente a Riglos para pedirle copia de la partida de matrimonio del oidor con Doña Andrea Albiurty y de todas las anotaciones que contenga. Justifica el pedido, “a los fines de ocurrir a inconvenientes y evitar la responsabilidad del gobierno”.

Entra en escena a continuación el también polémico arcádiano, contestando el oficio al Virrey, el mismo día. Su respuesta es que por el momento no puede contestar con toda extensión y que en los libros no está la partida ni nota sobre el particular.

El Virrey no queda satisfecho con la respuesta de Riglos, por lo que el mismo día ordena un segundo oficio a éste. A partir de ahora, comenzará un intercambio de oficios entre el Virrey y Riglos, caracterizado por la rigidez, la intolerancia y la crítica destructiva de Loreto, y la negación, calma y desfrazado acatamiento de Riglos.

Con la minuciosidad y la obsesión que lo caracterizaban, el Virrey objeta a Riglos aspectos formales de su respuesta, tales como por ejemplo la falta de fecha, y cuestiones de fondo, como el hecho de no haberle aclarado al Virrey, si estaba impedido de responderle o si le iba a responder más adelante, ni cuándo ni por qué postergaba la respuesta. En consecuencia, le reitera el mismo pedido del primer oficio, pero con mayores exigencias: esta vez le solicita toda documentación que esté relacionada con el mencionado documento, inclusive la licencia que se hubiera expedido para el matrimonio. Pareciera que ahora a Loreto ya no le quedan dudas acerca de la celebración de un matrimonio oculto, con la licencia de Riglos.

123 Según Juan Carlos, el matrimonio oculto tiene lugar ante el párroco y dos testigos, pero con el silencio de las pruebas y llevando a cabo todo de tal forma que su existencia permanezca totalmente desconocida.

124 El texto clásico del derecho en lo materia es la Enéctica “Satis vobis” de 17 de noviembre de 1741. Sin embargo, “a pesar de que el matrimonio oculto está rigurosamente prohibido por el derecho común, en razón del peligro de la poligamia, la seducción de las mujeres, el escándalo, los inconvenientes en la educación de la prelatura, los fraudes en asientos patrimoniales, y otros, pueden aparecer casos en los que el único modo de tranquilizar la conciencia y evitar el pecado sea realmente el matrimonio entre dos personas que no pueden en absoluto contraer pública y en cuyo caso, el matrimonio oculto, que por lo dicho se llama de conciencia, está permitido”. Para este autor, la causa debe ser muy grave e aprontado, como por ejemplo, cuando el varón y la mujer viviendo públicamente como en matrimonio y no existiendo ninguna sospecha del delito, llevan sin embargo oculta una vida conyugal. La consideración de las causas es deber del obispo y la celebración de este tipo de matrimonios lleva aparejada la obligación grave de guardar el secreto por parte del sacerdote asistente, de los testigos, del Ordinario y de sus sucesores, y aún del otro cóyuge. El matrimonio de conciencia no se anota en los libros parroquiales de costumbre sino en un libro especial, que se guarda cuidadosamente en el libro secreto de la Curia, y no se da testimonio de él sino a los que prueban tener un verdadero interés y no poder adquirir por otros medios prueba del hecho, con el Derecho matrimonial, Barcelona, Bosch Casa Editorial, pp. 270-274. Según Donoso, el libro especial “sólo se podrá abrir con permiso del obispo, ‘cuando lo exijase la administración de justicia’", con la Instituciones de Derecho Canónico americano, París, Librería de Rosa y Bouret, 1854, pp. 414-415.
El tono de este segundo oficio es dramático y amenazador; el Virrey apura a Riglos en mandar la partida del matrimonio, porque “el asunto urge” y le señala que, no le da la información que le pide, deberá comprometerse “a las resultas que subsigan de retardarme este documento tan necesario por su naturaleza”.

Siempre en línea con la rapidez que va a caracterizar a estas actuaciones, Riglos contesta el mismo día y trata de justificar las omisiones de su primera respuesta, excusándose en el apuro y en la circunstancia de que el edecán no le dio tiempo para responder como correspondía, por lo que había olvidado ponerla la fecha. En esta segunda oportunidad, Riglos reitera que no casó a su licenciada Andrea Albizury. Y refiriéndose a los habitantes de Buenos Aires, por ahora espectadores de esta obra teatral que no se sabe si concluirá como comedia o drama, pero que no cabe duda de que todo tipo de ingredientes, tales como encantamientos, habladurías, amenazas y desconfianza, considera que “todo pueblo es un monstruo que se compone por lo común, de unos aduladores, mentirosos; otros, llenos de pasiones y que aún tienen poca charidad de sus hermanos los próximos; y otros, de simples credulos, que ablan lo que oyen, sin ningún estomago, y digestión, que ablan por abiar, y no mas”. Otra vez se pone de manifiesto el desprecio y la desconfianza hacia el pueblo, para finalizar con una enigmática frase: “si ellos, han dado, o dan algunas señales, para que se hable, yo no tengo la culpa, quizás otros la pueden tener”.

Como no podía ser de otra manera, esta respuesta no satisface al Virrey, quien inmediatamente, el 27 de febrero de 1786, le dirige un tercer oficio a Riglos.

El Virrey no deja pasar ninguna oportunidad para oír a Riglos, y le reprocha que podría haber contestado mejor al oficio, mandando de vuelta al edecán y diciéndole cuándo podía pasarlo. Le señala nuevamente sus contradicciones, en este caso, entre su respuesta de la mañana y la de la noche, y lo acusa de que “se viene extendiendo para rehusar a mis encargos, y negros”. A esta altura, Loreto le manifiesta abiertamente a Riglos sus sospechas de que el hecho de que no se hubiera encontrado la partida de matrimonio es un indicador de la reserva con que se ha pretendido manejar el tema.

Por tercera vez el Virrey le expresa a Riglos que necesita el documento y disiente nuevamente con Riglos, en especial respecto a lo que éste opina del pueblo y le hace cargo a Riglos de los daños y perjuicios que ocasionan su demora en responder a los tres oficios que le mandó.

El tercer oficio del Virrey es contestado rápidamente por Riglos. En esta oportunidad, una de sus excusas a las aparentes contradicciones entre la primera y la segunda respuesta al oficio, es que el edecán que le llevó el oficio lo había tomado de sorpresa, y le había dicho que no se retiraría hasta que le entregase la respuesta. Ahora también trata de justificar sus anteriores respuestas a Loreto. Con respecto a la primera, le manifiesta que siéndole preciso registrar en los libros en donde se podía sacar el documento que se necesitaba, no podía en aquel momento contestar, si bien tenía por cierto que en los libros no estaba la partida que buscaban, porque no recordaba haber dado licencia, lo que le pareció suficiente respuesta para darle a entender que no se había celebrado el matrimonio, aunque no hiciera referencia a los libros parroquiales, referencia que no podía hacer amigo de los términos. Ya para la época en que Riglos contestaba por tercera vez al Virrey, seguía negando la celebración del matrimonio.

En esta respuesta, Riglos se extiende acerca de los casos en los cuales los contrayentes, además de no tener la licencia del ordinario para contraer matrimonio, necesitan de otra del Superior gobierno, pero insiste en que él no dio ningún tipo de licencia, ni bajo el nombre de Andrea Albizury ni de ningún otro que tenga Andrea Albizury. Con respecto a su critica del oficio conviene que “el pueblo es un monstruo que se compone por lo común de unos aduladores, mentirosos”, remite al conocimiento acerca del género humano que proveen los Santos Libros y a la experiencia, aunque no duda del conocimiento acerca de los hombres que tiene el Virrey. Sin embargo, advierte que hasta los más lúcidos pueden ser engañados, y así “David era un Príncipe justo, sabio e iluminado con el espíritu de Profecía, y no obstante esto fue sorprendido con la impostura de Sibá contra el mismo hijo de su íntimo Amigo Jonatas”.

Ante la tercera contestación de Riglos, el 1 de marzo de 1786, el Virrey le remite un cuarto oficio, pero esta vez suscríben solo por su asesor letrado. Con él al lado, el Virrey parece mucho más seguro y confiado que antes. Descalifica la respuesta de Riglos acerca de su apuro en contestar porque el edecán lo estaba esperando, y reconoce que Riglos filosofando lo vence, pero que a él le interesa lo principal, y no lo accesorio.

Otra vez los habitantes de Buenos Aires son el tema de las discusiones entre el Virrey y el Arcediano. El Virrey acusa a Riglos de herir a un pueblo que con toda razón se escandaliza, ya que lo grave sería si fuera indolente al escándalo, y considera que de la utilización de las Sagradas Escrituras, a las que había recurrido Riglos como fuente de uno de los argumentos, “se tiene hecho muchas veces muy mal uso”.

El Virrey le recuerda al arcediano que el gobierno ha sido muy considerado con él y con los errores y omisiones de sus respuestas, al tiempo que lo acusa de no querer darle la información que le pide.

Por cuarta vez le pide el “documento fehaciente del casamiento”, pero ahora, “ruego, y encargo a VS nuevamente, pero con urgencias acumuladas, y más poderosas”. Temerario de que Riglos, con la felicitación de poca colaboración, vuelve a amenazar con “el uso de otros medios” y le hace cargo de los perjuicios que ocasionará su omisión y retardo, sobre los que deberá responder ante Dios y el pueblo, porque es preferable sacrificar el escándalo de una sola persona, que el de muchas.

La respuesta de Riglos al cuarto oficio no se hace esperar, y el 3 de marzo de 1786 insiste en la presión del apuro en remitir las respuestas al Virrey, porque las dos veces lo habían tomado de sorpresa. Por momentos inocente, el arcediano le hace saber al Virrey que tal vez no entendió sus pedidos debido a su rudeza, y con respecto a la cínica opinión del Virrey acerca de la versación de Riglos sobre la que se había referido en su anterior oficio, dice no creer que pueda vencerlo como filósofo.

Por cuarta vez, niega el matrimonio, insistiendo en que no puede acreditarlo, ya que no está asentado en los libros parroquiales ni en otro documento, ni le consta que se
hubiera practicado sin esta formalidad. Con respecto a escándalo, Riglos pone en cabeza del Virrey la facultad de remediarlo con su autoridad y poder coactivo, de los que carece el arcediano.

La respuesta de Riglos, por quinta vez, no satisface a Loreto. Por oficio del 4 de marzo pide las certificaciones jurídicas que acrediten el matrimonio.

Y por quinta vez el arcediano vuelve a negar la celebración del matrimonio y la concesión de la licencia, pero ahora, ante la presión del Virrey, ensaya una certificación en la que asesta que “quien no en los libros parroquiales ha encontrado partida, ni tiene noticia de que conste en otro documento, ha dado licencia para que ésta se case”, es decir, da fe de la no celebración de un hecho.

En esta oportunidad transcurrieron un par de días entre la respuesta de Riglos y la del Virrey, y el 9 de marzo Loreto, nuevamente con asesoramiento letrado, le dirige un sexto oficio a Riglos.

Por primera vez el Virrey reconoce abiertamente que se está haciendo eco del rumor que corre en la ciudad acerca del matrimonio de Palomeque con Andrea Albizury, sin haber mediado licencia real y que estos rumores están acreditados por sus antecedentes “y otros comprobantes”.

En consecuencia, y teniendo por acreditado el hecho, le manifiesta a Riglos que se ve en la obligación de hacer cumplir las leyes, evitando perjuicios insanables y el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Preocupado por la transparencia del procedimiento, y de que aparezca en el expediente constancia de todo lo actuado, ordena a Riglos en nombre del Rey, que remita certificación jurídica del matrimonio y diligencias practicadas. Ahora apela a las obligaciones que tiene Riglos para con el rey, le pide que dé prioridad a este trámite, que expida el documento con las formalidades con que lo expedirá si se lo pidiere el rey directamente y que evite que el virrey tenga que tomar otras medidas.

El 10 de marzo Riglos contesta al sexto oficio insistiendo en que no puede certificar lo que no sabe y remitiendo el siguiente certificado: “certifico en cuanto puedo, y ha lugar en derecho, que no sé que Doña Andrea de Albisury esta casada con el Sr. Odytor Don Tomas Ignacio Palomeque, y que habiendo reconocido los libros parroquiales no he hallado partida alguna ni asiento de semejante matrimonio”.

Pareciera que a esta altura ya Riglos ha perdido la paciencia, por lo que le manifiesta al Virrey que si esta respuesta no es la que éste espera, que se lo especifique, “porque yo ignoro como deva formarlo”.

El 12 de marzo de 1786, Loreto dirige un séptimo oficio a Riglos. Como era de esperar, al Virrey no le satisface la respuesta de Riglos, por “no venir acompañado de la solemne jurisdicción certificada de lo que le conste”. ¿Cómo podía el Virrey aceptar el certificado negativo de Riglos, cuando a él le constaba que el matrimonio había tenido lugar? Para el Virrey, Riglos introduce “ex profeso” la confusión en las actuaciones, y en su séptimo oficio le recuerda todas las oportunidades en las que le encargó a Riglos que “se abstuviera por las justas causas que se manifiestan en dicho decreto reducidas a evitar toda confusión y dejar las cosas en el debido tono y claridad”.

Ya el Virrey no oculta la opinión que le merece Riglos. Le dice expresamente que su modo de proceder no es digno de un juez eclesiástico, que su conducta se hace intolerable y que no se puede escudar en su ignorancia una persona a cargo de un juzgado, por la posibilidad que tiene de valerse de un asesor “que pueda dirigirle por sus sendas y preceptos”, en caso necesario.

Por séptima vez exige que Riglos remita puntualmente la formal certificación jurídica y le advierte, tal como lo había hecho últimamente, que no tolerará más la inobediencia de Riglos y que lo hará responsable de las consecuencias, en nombre del Rey.

Cinco semanas después del primer pedido del Virrey, y después de siete oficios, el 13 de marzo Riglos certifica nuevamente, pero esta vez sobre la base de la compulsa de los libros correspondientes a 1784, 1785 y 1786, que no existió el tal casamiento ni se dio licencia para celebrarlo.

Esta vez es Riglos quien no quiere dejar pasar nada, y junto con la certificación, se dirige al Virrey reprochándole que él no le dio ménos para recibir tan fuertes y ominosas expresiones con que increpa su desobediencia, sólo por haberle dicho que no podía certificar un casamiento que no había hecho ni dado a otro licencia para que lo hiciera y que a pesar de su ignorancia, sabe lo que significa desobedecer. La acusación de ignorancia parece haberle dolido bastante al arcediano, porque en continuación le manifiesta a Loreto que no es tal su ignorancia como para necesitar un asesor y que no se puede certificar un hecho negativo, pues sólo se certifica sobre aquello que perciben los sentidos.

Tal vez intuyendo que éste sería su último contacto en el expediente con el Virrey, Riglos le dice abiertamente que “tengo la desgracia de no agradar a V.E en mis representaciones” y que respete su autoridad como Virrey, pero no comparte sus criterios.

Con esta respuesta, se pone fin a la relación entre el Virrey Loreto y el Arcediano Miguel José de Riglos, estipulada a lo largo del expediente, que se desarrolló a través de siete oficios y treinta y cuatro oficios, y que se extendió por aproximadamente dos meses, lapso que impresiona como mucho más largo por el intenso, agresivo y amenazador tono del intercambio.

Ahora la causa parece haber entrado en un ritmo más lento. Dieciséis días después de la respuesta de Riglos, se ordena el pase del expediente en vista al fiscal de la Audiencia de Buenos Aires, José Mármol de la Plata, quien, en línea con estos lapsos más extensos entre actuación y actuación, tardó un mes y medio en contestar,简直就是que hasta ese momento el mayor intervalo del pleito.

Tocaba al Fiscal dictaminar en un caso que le llegaba muy cerca, y pronunciarse sobre el comportamiento de un colega suyo de la Audiencia, manifestando que le era doloroso tener que pronunciarse, pero que inevitablemente debía cumplir con su obligación.

Márquez de la Plata se refirió en primer lugar al tema del efecto que este supuesto matrimonio había tenido para el pueblo, sosteniendo que “es cierto que en este asunto hay
mucha facilidad en las gentes de todas clases para dar por público lo que no existe, y mas en
este pueble que con la novedad de estas creaciones suele ocuparse en observar, e interpretar
sinestramente los movimientos de cada ministro". Para Levaggi, "con el oidor Tomás
Ignacio Palomeque, en el espinoso asunto de su matrimonio oculto, tuvo la delicadeza de
no prestarle oídos a la voz pública que lo acusaba y de manifestar el dolor que le producía
el ejercicio de su ministerio en tal circunstancia".

En opinión del Fiscal, generalmente este tipo de matrimonios siempre eran secre-
tos, porque "semejantes contravenciones se hacen siempre ocultamente con recatos y
pallaciones", a lo que se sumaba el hecho de que "como los señores oidores son personas
poderosas, se presume que no les faltan arribos, y confidencias para efectuar sus matrimo-
nios de secreto, y eludir los medios ordinarios de su averiguación", por lo que son de
"dificultosísima prueba".

Por ello Márquez de la Plata se pronunció acerca de la necesidad de abrir la causa
a prueba, produciendo la testimonial e invocando la ley LXXXVII, tít. 16, libro 2 de la Recopi-
lación de Leyes de Indias que establece la competencia de los presidentes de las audien-
cias para conocer de las causas de casamientos y parcialidades de oidores, y otros minis-
tros, y del aviso y de las informaciones que es necesario efectuar.

Una vez producida la prueba, según el Fiscal, el Virrey,
"de las declaraciones, y circunstancias de los testigos, de los informes
secretos, y jurados, asestaciones reservadas, y demás diligencias, que
haya mandado hacer, o da por incierto al ministro por auto declaratorio,
como corresponde a disposición de la ley 82 del mismo título y libro
citados, en la pena de ella o sobresale en el procedimiento, o envía las
actuaciones al consejo con su parecer, para que en él se tome la resolu-
ción que conveenga".

Sin embargo, para el Fiscal, el hecho está probado por la propia convicción del
Virrey, las legítimas presunciones, que produce el tenor de las constataciones del dipu-
tado de la jurisdicción eclesiástica y el reconocimiento del hecho que hiciera el Virrey en su sexto
oficio a Riglos.

En línea con el dictamen del Fiscal, el 27 de mayo, casi cuatro meses después del
primer auto del Virrey, y casi un mes y medio después de la evacuación de la vista fiscal, el
Virrey, decidió que "por la calidad del prohibido hecho de que trata se hace indispensable su
continuación" y "para la remoción del escándalo", "el medio más adecuado y oportuno a los
propuestos fines es el esclarecimiento de la verdad sobre las especies, divulgadas referen-
tes al matrimonio que se dice contraído entre el señor oidor don Tomás Ignacio Palomeque
y doña Andrea Albisury", por lo que ordenó recibir secreta información de testigos.

---

123 Levaggi, Abadello, El Virreinato rioplatense en las vistas fiscales de José Márquez de la Plata, Universidad del
Museo Social Argentino, Buenos Aires, 1988, p. 18. El mismo autor agrega: "coincidía, por otra
parte, el hecho con los halagos de su reciente matrimonio y la espera del primer fruto del mismo".

124 Un testigo afirmó que "hallándose pocos días en un cuarto con ventanas a la calle de su casa en
acción de escribir, percibió a la parte de afuera la conversación de dos criadas, y que la una le decía a la otra
en el tono que acostumbras: ¿no sabes que parió Doña Andrea, y después se le ha muerto la criatura?".
el resto del pueblo, dijeron que éstos estaban emparentados con las familias más notables de Buenos Aires.\footnote{ Tales como las de "Don Juan de Larra, D. Marcos Riglos, de Don Manuel Warne, de las Quintana, Abellánidas, Larrázabal, Arna, Oroz, Gana, y en grados más distantes, con las de Gascon, Galloso, Pinedo."}

Uno de los testimonios más importantes, y que confirmó las presunciones acerca de la efectiva celebración del matrimonio, comprometiendo la participación de Riglos en el tema y su pretensión de ocultar el casamiento, fue el del alcalde Manuel Antonio de Wernes, quien sostuvo que Riglos le había confiado que Palomeque y Albizu muy estaban efectivamente casados, mediante la licencia que había dado "de secreto, y comunión bastante" al Doctor Don Pantaleón Riverola, de quien habían recibido las bendiciones para la celebración del matrimonio y que se hallaba en dificultades ante el oficio que le había pasado el Virrey para que remitiesse certificación o fó de casamiento porque había negado tanto el casamiento como que hubiese dado la licencia para certificarlo, y que el motivo que tenía para sigillerlo, era por el perjuicio que podría resultar al Sr. Palomeque quien lo había pedido así. Según el propio declarante, "sin prometer, ni negarse a la reserva encargada" éste había tratado de persuadir a Riglos "lo notorio que era en toda la ciudad el casamiento, con el agregado de hallarse encinta Doña Andrea, y haber participado ella, y su madre a varias personas" y que seguramente el Virrey ya tendría sobre esto "individual noticia". Conforme Wernes, éste le habría aconsejado que el mismo Palomeque "se fuera en derechura al mismo Excmo. Sr. Virrey, y declarándose, confiere de su notoria justificación y piedad del remedio del desacato incurrido", a lo que Riglos le habría respondido que se lo propondría al oidor. A mayor abandono, el testigo agregó que poco días después de este suceso, Riglos le había hablado del segundo oficio del Virrey, y que nuevamente el alcalde le había aconsejado "que mirase lo que hacía, que Su Excelencia tendría ya una pública justificación, y que respondiese sobre el arbitrio que le había dado", a lo que Riglos le habría respondido que "bien sabía la facilidad de las mugeres" y que no dudaba que "la madre y la hija lo habían publicado", pero que él no podía menos que si galarlo porque "el medio que le había sugerido no le abrasaba al Sr. Palomeque por el miedo, que le dejó tener a Su Excelencia".

El 27 de junio de 1786, el juez comisionado dio cuenta de las diligencias efectuadas y al día siguiente, sin esperar la respuesta del Virrey, le hizo saber a éste sus escrúpulos de conciencia, y su inquietud "con la más refutá contienda entre mi obediencia y respeto". Después de expresar lo que se había sentido con la confianza que el Virrey había puesto en él, le manifestó que "nada consideraba tampoco más arduo, ni de ejecución más ingrata, aún al ánimo más resuelto, que la pesquisía del exceso, o trasgresión de las leyes relativas al casamiento prohibido en ellas a los magistrados tan dignamente autorizados, y de tan brillantes prerrogativas como el Señor Don Tomás Ignacio Palomeque; y más concurremiento, en mi para aumentar mi respetuoso temor, mi inmediata dependencia del alto Tribunal de su destino en la clase que mi fortuna me conserva de abogado; palabras que ponen de manifiesto el respeto que inspiraba el cargo de oidor, así como el reparo que tenían sus colegas en pronunciarse en su contra.

El 6 de julio de 1786 el Virrey tuvo "por más conveniente y conforme el esperar sobre todo la Real determinación", por lo que el 8 del mismo mes se sacó copia del expediente y se informó al Rey, a través del Consejo de Indias, para que recaiga "la resolución que fuere del agrado de S.M.

Transcurrieron un año y dos meses sin que ninguna actuación se incorporara al expediente, cuando el 31 de agosto de 1787, el Señor Pedro Ignacio Picasari le remitió al Virrey testimonio de las diligencias que el Cabildo eclesiástico había tenido que practicar "en descubrimiento del matrimonio oculto" del oidor Palomeque, haciendo referencia a un oficio del Virrey del 24 de agosto, de que no está agregado al expediente "a los fines que VE previene" y "quedando haciendo las demás respectivas a los otros matrimonios de igual naturaleza".

Anoto a la paralización del expediente durante un lapso tan prolongado, y a la falta de incorporación al mismo, de actuaciones que se mencionan incidentalmente, deducimos que debe haber existido alguna instrucción por parte del Virrey, y por parte del propio cabildo eclesiástico, para que se efectuaren diligencias tendientes a la averiguación de los matrimonios ocultos de los oidores, a raíz del casamiento de Palomeque.

De la información que Picasari le remitió al Virrey, resultaba que el 27 de agosto de 1787, el Cabildo eclesiástico, como consecuencia del expediente que tenía iniciado sobre "la materia de los casamientos ocultos de conciencia hechos en esta vacante cuya indagación se hace forzosamente por los graves motivos que expresa el Excelentísimo señor Virrey" y constando "por el expediente que se ha formado a este intento, que uno de los matrimonios de este clase fue el del Señor Oidor Don Tomás Ignacio de Palomeque", ordenó examinar al Doctor Don Pantaleón de Riverola.

Esta documentación que se incorpora a las actuaciones que estamos analizando, consiste en una declaración testimonial efectuada el 27 de agosto de 1787, en la que Riverola, preguntado acerca de la fecha que tenía el certificado que había pasado al señor Arcediano de dicho matrimonio, había declarado que la pareja se había celebrado por el mes de agosto y octubre del año 1785 y que lo había celebrado en la casa que habitaba el mismo señor oidor. Aníbal preguntó de si en el tiempo en que el Virrey pasaba a Riglos los oficios inquiriendo sobre la verdad del referido matrimonio, estaba ya éste verificado de antemano, había respondido de forma afirmativa. Y para finalizar, informó que los testigos habían sido doña Antonia de Echevarría, madre de la contrayente y el profesor de medicina don Agustín Fabre. Dos días después, el Cabildo eclesiástico citó a Fabre, quien respondió en el mismo sentido que Riverola.

Con estos antecedentes en su poder, en septiembre de 1787 el Virrey le pidió al Cabildo eclesiástico la certificación del matrimonio, a efectos de remitirlo a Fondo del Monte.

¿Qué es lo que había sucedido en realidad? ¿Por qué tenemos que esperar un año y medio para enterarnos de lo que en realidad había sucedido en este intervalo, y que motivó el enojó del Virrey?

Ignoramos por qué faltan eslabones en este expediente que pretende reconstruir una historia, pero de las constantes que se incorporaron a posteriori en estos autos, surge
que el 10 de agosto de 1785, es decir, casi seis meses antes de que el Virrey iniciara el expediente, Palomeque había solicitado, por medio de su hermano Don Lucas Palomeque, oficial de la Secretaría del Despacho de Hacienda, licencia para casarse con persona del distrito de la misma audiencia, o de fuera de él, "en quien concurren las circunstancias correspondientes" y que el 11 de agosto de 1785, es decir casi un año después, le había sido otorgada, con la prevención de que "si casase con persona natural del distrito de esa audiencia deberá pasar a servir en la de Charcas".

Decidió a no esperar la licencia del rey, un mes después de requerir el real permiso, en septiembre de 1785, Palomeque se había casado en forma privada con Andrea Albizary, mujer residente en su distrito. Los había casado el Doctor don Pantaleón de Rivero, clérigo presbítero del Obispado, con facultad y comisión del Doctor don Miguel José de Riglos, Arcediano de la Iglesia Catedral, y juez diputado de la Jurisdicción eclesiástica en sede vacante.

En orden a seguir reconstruyendo los hechos, el 6 de octubre de 1786, se había resuelto que el oidor don Tomás Ignacio Palomeque pasase a servir en la de Charcas, y que don Lorenzo Blanco Cicerón, oidor de esta última, se trasladara a servir la plaza que resulta vacante en la promoción de Palomeque. El 26 de diciembre de 1786 Palomeque se había notificado de la licencia y del traslado.

Sin embargo, durante cinco semanas, Riglos había respondido a siete oficios del Virrey, negando la celebración de un matrimonio que había tenido lugar cinco meses antes.

Finalmente, el 19 de septiembre de 1787, es decir, un año y siete meses después de la iniciación de las actuaciones por parte del Virrey, y dos años después de la celebración del matrimonio, ante la negativa de Riglos, la partida de matrimonio de Tomás Ignacio Palomeque con Andrea Albizary era asentada por los rectores de la Iglesia Catedral.

El 1 de septiembre se ordenó dar intervención a la Junta del Montepio del Ministerio de Hacienda. Según Burkholder y Chandler, los llamados "montepios de ministros y de oficinas" fueron uno de los instrumentos de que la corona se sirvió para aplicar con mayor rigor las restricciones matrimoniales. Estos fondos de pensiones, administrados por el gobierno a favor de los deudos de sus funcionarios desaparecidos, se usaron como medio para tramitar las peticiones de permisos matrimoniales haciendo al mismo tiempo una detaillada investigación, además de que permitían imponer sanciones porque tenían la facultad de suspender el pago de pensiones a viudas y huérfanos en caso de que se descubriera alguna irregularidad. Los autores citados señalan que el control matrimonial se ejercía con el siguiente sistema: un juez de audiencia que pretendiera contrar nupcias solicitaba por medio del representante de su categoría en la Junta, la aprobación de su novia, ya que si el montepío no aceptaba y registraba a la esposa no le pagaba la pensión una vez muerto el juez solicitante. El examen consistía únicamente en comprobar mediante testimonios que la dama en cuestión fuera de buena posición social y de una familia digna de contar entre sus miembros al juez de una audiencia. Si todo salía bien, la señora era registrada como dependiente legal del magistrado, con derecho a recibir una pensión vitalicia una vez viuda. Los hijos eran agregados a la lista cuando nacían. Según Burkholder y Chandler, "el montepío no podía dar excepciones a la ley que prohibía el matrimonio de los ministros con mujeres naturales de la jurisdicción donde administraban la real justicia. En ese caso especial, el interesado tenía que empezar por solicitar al rey la exención, que luego, si se le concedía, presentaba a la Junta". Por lo tanto, para estos autores, "la función del montepío, pues, era importante pero pasiva. En los primeros tiempos, en un juez que se hubiera casado sin licencia con una dama de la localidad podía claudicar ser molestado durante años o para siempre, pero una vez establecidos los montepios las investigaciones que hacían eliminaron tal posibilidad, ya que tenían la obligación de hacer acatar las leyes y de informar acerca de cualquier irregularidad que descubrieran. Y como lo que estaba en juego era la pensión de la viuda, sólo un magistrado muy rico podría permitirse un matrimonio secreto sin graves consecuencias. La regularización de los procedimientos del montepío, pues, fue un medio de dar rigor a la aplicación de las leyes relativas al matrimonio durante el período final de la época colonial".

Siguiendo los procedimientos de rutina, el 20 de octubre de 1787 se remitieron los antecedentes a la Junta del Monte Fio.

6. EL FINAL DE LA HISTORIA

Terminaba así una larga batalla entre el Virrey Loreto, el oidor Palomeque y el arcediano Riglos, de la que ninguno de los que intervinieron en ella salió indemne. Habían transcurrido dos años de idas y venidas, de intrigas, ocultamientos, favoritismos y verdades a medias, en los que todos resultaron afectados.

El arcediano Riglos interpuso un recurso de fuerza ante la Audiencia, alegando haber concedido la licencia a Palomeque para casarse, a tenor de que éste ya tenía otorgado permiso del rey para contraer matrimonio. No cabe duda que Riglos tuvo que pagar un precio por muy alto por la forma en la que había procedido en la cuestión del matrimonio de Palomeque, debiendo responder ante las objeciones que el cabildo eclesiástico le hizo de su actuación.

Palomeque, por su parte, a pesar de su matrimonio secreto, no pudo impidir que se trasladara. Sin embargo, continuó una exitosa carrera como oidor de la Audiencia de Charcas, a partir del 17 de marzo de 1787, y luego como alcalde del crimen de la Audiencia de Lima, desde el 16 de marzo de 1797. De allí pasó a ser oidor de la misma audiencia a partir del 31 de diciembre de 1805, y se desempeñó como Consejero de Su Majestad. Sirvió en la primera corte suprema del Perú independiente y luego en la suprema corte establecida en 1824. Se jubiló en 1828 y murió en su patria adoptada el 22 de mayo de 1834.

Loreto, por su parte, tuvo que abandonar su rigidez cuando el Canónigo y Maestrescuela Juan Baltasar Maziel dictaminó que Palomeque podía casarse públicamente al

---

128 Burkholder, Mark A. - Chandler, Dewitt S., (n. 2), pp. 159-160.
129 Lomelí Villegas, Guillermo, (n. 33), p. 93.
7. CONSIDERACIONES FINALES

Más allá de la forma en la que concluyó este episodio, las actuaciones que se suscitaron como consecuencia de este matrimonio prohibido, nos llevan a las siguientes consideraciones finales:

Desde el punto de vista formal, la investigación se llevó a cabo a través de un expediente administrativo, en el que no fueron los elementos usuales en este tipo de trámites, tales como presentados por el Virrey a través de su secretario, libramiento de oficios y sus respectivas respuestas, declaraciones testimoniales, agregación de prueba documental y cierre del periodo probatorio.

El caso analizado, tal vez a semejanza de otros tantos planteados en otros lugares de Hispanoamérica, nos acerca a una serie de temas que están presentes independientemente del lugar en el que se esté y que son propios de todas las regiones del Nuevo Mundo en las que la Corona española ejerció su dominio: la consideración social que merecían los hijos, la repercusión social de su comportamiento, la relación hombre-mujer, las concepciones acerca del honor de ambos, el papel de la mujer, el peso social de determinadas familias, las relaciones entre el poder político y la Iglesia y entre los propios integrantes de la misma, entre otras.

Pero por sobre todas las cosas, este matrimonio prohibido nos acerca a dos cuestiones que son independientes de la época y del lugar: la preocupación por la transparencia de quien ejerce el poder político y la necesidad de garantizar la imparcialidad de quienes tienen el poder de decidir.

---


125 El marqués de Loreto falleció en Madrid el 17 de febrero de 1803. Tanzi, Héctor, (n. 128).